

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	WILLIAM RENE VELASQUEZ CORREA
DEMANDADOS	CO DIESEL SAS COLPENSIONES (tercero interviniente)
RADICADO	05005.31.05.021.2016.01119.01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Contrato Realidad – Prestaciones sociales – Aportes a la seguridad social – Indemnización por despido – e indemnizaciones moratorias. Pensión de invalidez (facultades ultra y extra petita)
DECISIÓN	Revoca y Confirma

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Estudiado, discutido, y aprobado en Sala virtual.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 “*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*”, y una vez surtido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria y escritural de segunda instancia al interior del proceso ordinario laboral, promovido por el señor **WILLIAM RENE VELASQUEZ CORREA** contra la sociedad **CO DIESEL SAS**, y dentro del cual se llamó como tercero interviniente a **COLPENSIONES**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, conocer por parte de este colegiado el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de las partes, contra la sentencia que profirió el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 26 de marzo de 2019, y conocer la misma en grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como hechos que la motivan indicó se indicó, en síntesis, lo siguiente: el señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA laboró en esta ciudad, por más de 25 años en la Calle 80 Nro. 65-145, en el cargo de mecánico y mantenimiento de vehículos bajo un mismo vínculo contractual al servicio de las empresas TRANSPORTES INOXIDABLES, COORDINADORA DE TANQUES SAS y CO-DIESEL SAS, de quienes dijo, se encuentran estrechamente relacionadas por sus representantes legales y su actividad económica.

Informó que el 1º de agosto de 2014 suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa CO DIESEL SAS, para desempeñar funciones de mantenimiento de vehículos de dicha empresa, lo cual constituye una labor de su propio objeto social. Mencionó que, entre otras, en dicho contrato se pactaron obligaciones como: - atender a los directivos o personas que EL CONTRATANTE designe para prestar orientación necesaria encaminada a la realización del trabajo o servicio contratado, acatando estipulaciones de tiempo y modo en la ejecución de las actividades requeridas; - Atender el horario derivado de las necesidades resultantes en la ejecución del contrato, y; - Dar cumplimiento a los requerimientos y procedimientos implementados en la

empresa contratante en materia de seguridad, salud en el trabajo y demás, con el fin de contribuir en el mejoramiento de estándares de calidad de la misma.

Agregó que en ese contrato también se pactó que el contratante facilitaría al contratista el acceso a sus instalaciones y le suministraría a este último los implementos necesarios para la prestación de sus servicios en forma eficaz. También dijo que la empresa le suministraba los elementos de protección, como tapa oídos y guantes, uniforme y carnet de ingreso.

Indicó que, recibía órdenes, cumplía horario y percibía una contraprestación directa por la prestación del servicio personal consistente en asignación variable, precisando que lo que en realidad existía era un contrato de trabajo a término indefinido.

Adujo que ese contrato fue terminado de manera verbal, unilateral e injusta el día 22 de junio de 2016, pese a que se encontraba incapacitado desde el 7 de abril de 2015, sin haberse solicitado la respectiva autorización al Ministerio del Trabajo.

Se duele que durante la vigencia de la relación contractual no le fueron cancelados los aportes a la seguridad social integral, ya que los pagaba directamente como independiente y a través de intermediarios. Dijo que no le fueron pagadas las incapacidades médicas por su fondo de pensiones, por la mora patronal, y que tampoco le fueron debidamente pagados los salarios entre julio de 2015 y junio de 2016. Agregó que la empresa demandada, durante la vigencia de toda la relación laboral, se abstuvo de reconocerle las prestaciones sociales, el auxilio de transporte y las vacaciones.

Manifestó que la prestación de sus servicios la realizaba de forma exclusiva para la empresa CO DIESEL SAS y con absoluta disponibilidad frente a los requerimientos que le hacían los señores IGNACIO BAUTISTA y SERGIO GAVIRIA, coordinadores del patio donde laboraba, y personas vinculadas directamente a la empresa CO DIESEL SAS.

Informó que padece enfermedad de cadera, con implantación de prótesis, y que se encontraba incapacitado desde el 7 de abril de 2015, por el diagnóstico M255 (dolor en articulación), lo cual muy seguramente adquirió a partir del esfuerzo físico, las cargas y movimientos repetitivos que desempeñaba al servicio de la empresa demandada.

Precisó que actualmente tiene restricciones laborales y presenta limitaciones para desempeñar la actividad laboral; acumula más de 398 días de incapacidad médica, manifestando que la empresa CO DIESEL SAS tenía conocimiento de su enfermedad, ya que le autorizaba los permisos para asistir a las citas médicas, y pese a ello no lo reubicó laboralmente, sino que procedió a despedirlo sin justa causa. Estima ser titular de estabilidad laboral reforzada.

III. – PRETENSIONES

Con fundamento en los anteriores hechos, solicita se declare que entre él y la empresa CO DIESEL SAS, existió un contrato de trabajo a término indefinido, entre el 1º de agosto de 2014 y el 22 de junio de 2016, que finalizó de manera unilateral e injusta por el empleador. Y que se declare que dicha terminación se dio en contravía del principio de estabilidad laboral reforzada y contrariando el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.

Que, en consecuencia, se condene a CO DIESEL SAS a pagarle salarios insolutos, auxilio de transporte, prima de servicios, vacaciones, cesantías e intereses a las mismas, sanciones moratorias por ausencia de pago de las prestaciones sociales y de consignación de las cesantías a un fondo administrador, sanción de pago doblado de intereses a las cesantías, aportes a la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), las incapacidades médicas adeudadas, superiores al día 180 y no pagadas por Colpensiones, así como ser reintegrado al cargo que desempeñaba al momento del despido o uno de mayor jerarquía, con el pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde el despido hasta el reintegro efectivo y el pago de la indemnización especial por despido en estabilidad laboral reforzada.

Subsidiariamente, en caso de no proceder el reintegro, solicitó el pago de la indemnización por despido injusto, la indexación de las sumas objeto de condena, lo que ultra y extra petita se halle probado y las costas procesales.

Que, asimismo se ordene a Colpensiones, recibir los aportes retroactivos a pensiones que sean pagados por CO DIESEL SAS.

IV. – RESPUESTA DE LA DEMANDADA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, las demandadas contestaron oportunamente.

Respuesta de Colpensiones:

La misma obra a folios 75 al 81 del expediente. A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; afirmó que no le constan los hechos de la demanda, y propuso las excepciones de fondo: Inexistencia de la obligación de Colpensiones de recibir aportes a seguridad social retroactivamente; buena fe; imposibilidad de condena en costas y la excepción genérica.

Respuesta de CO DIESEL SAS:

Su contestación obra a folios 109 y siguientes del expediente. A través de la misma, negó el carácter laboral del contrato celebrado entre las partes, precisando que la empresa CO DIESEL SAS es jurídica y funcionalmente independiente de las empresas TRANSPORTES INOXIDABLES SAS y COORDINADORA DE TANQUES, aceptando que sí existe un contrato con el demandante, pero de carácter civil por prestación de servicios, que se ejecuta desde el 1º de agosto de 2014.

Argumentó que el contrato celebrado con el demandante tenía un objeto claramente determinado; que no existía imposición de horarios ni subordinación.

Manifestó que el demandante prestaba sus servicios a otras empresas y no se dedicaba de manera exclusiva a prestar servicios a CO DIESEL SAS, teniendo libertad para realizar sus actividades e incluso decidiendo si realizaba o no el servicio correspondiente.

Negó todos los hechos que narraron la existencia de subordinación; se opuso a las pretensiones de la demanda, y; formuló las excepciones perentorias de Inexistencia de relación laboral entre las partes, inexistencia de elementos esenciales de un contrato de trabajo, inexistencia de subordinación y dependencia, confesión de la parte actora sobre la existencia de un contrato de prestación de servicios, pago de honorarios – inexistencia de pago por concepto de salario, inexistencia de establecimiento de obligaciones y/o funciones laborales, inexistencia de jornada laboral e, inexistencia de identidad entre la empresa CO DIESEL SAS, COORDINADORA DE TANQUES SAS y TRANSPORTES INEXIDABLES SAS, entre otras.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el día 26 de marzo de 2019, el Juez de conocimiento DECLARÓ la existencia de una relación laboral entre el 1º de agosto de 2014 y el 22 de junio de 2016 (tomando una certificación expedida por Co Diesel SAS, según folio 29 del expediente).

Condenó a la empresa demandada a pagarle al señor WILLIAM RENÉ VELÁSQUEZ CORREA, la suma de \$15.424.893 por salarios insolutos en los años 2015 y 2016; por cesantías \$2.048.750; intereses a las cesantías \$195.654 y otro tanto por sanción doblada por no pago de dichos intereses; por primas de servicios \$2.048.750; vacaciones por \$1.024.375; indemnización por despido injusto por \$2.123.269; pago de aportes faltantes a la seguridad social en pensiones por el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2014 y el 22 de junio de 2016, conforme al correspondiente cálculo actuarial liquidado por Colpensiones con los respectivos intereses de mora; pago de indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990,

respectivamente por los valores de \$31.960.008 y \$27.994.933, más los intereses moratorios luego de los 24 meses. Absolvió por el reintegro, el auxilio de transporte, las incapacidades médicas reclamadas y la indexación de las sumas objeto de condena, y le impuso condena en costas a la empresa demandada y en favor del demandante.

Como fundamento de su decisión, estimó el a quo, luego de referirse a los elementos del contrato de trabajo (Art. 23 del CST), esto es, actividad personal, continuada dependencia y subordinación, a la presunción establecida en el artículo 24 del CST, a la jurisprudencia sobre el tema y a la presunción establecida en favor del trabajador en el artículo 24 del CST, que, de acuerdo a la prueba recaudada, en el presente caso el demandante cumplió con probar la efectiva prestación del servicio, la cual incluso aceptó la parte demandada.

Argumentó que la demandada no desvirtuó la subordinación ni la retribución del servicio, ya que conforme a la regulación del contrato al que se le dio el nombre de *“prestación de servicios”*, se estableció la función de mantenimiento de los vehículos de la demandada, la cual se prestaba de manera continua, estableciéndose la prestación personal del servicio, con la prohibición de transferir el contrato a otra persona sin la autorización del contratante; que era la empresa quien suministraba las herramientas para realizar la labor, que la misma se desarrollaba en sus instalaciones, y se acreditó el pago de lo que las partes denominaban *“honorarios”*.

Agregó que en la cláusula 8,7 del denominado contrato de prestación de servicios, se estableció la continuidad de la actividad, con el establecimiento del horario, lo cual denota la disponibilidad que el trabajador debía mantener al servicio de la demandada, y que la función del trabajador tiene completa identidad con el objeto social de CO DIESEL SAS.

Con relación a la pretensión de reintegro absolvió de la misma, argumentando que no había lugar al mismo, ya que al momento de la terminación del contrato el trabajador ya no se encontraba incapacitado, y que por la prueba sobreviniente que acreditaba su estado de invalidez, no era

posible ordenar su reintegro. En lugar del reintegro, concedió el pago de la indemnización por despido injusto, declarando fenecido el vínculo sin justa causa, indicando que no se encontraba probado –como lo alegó la empresa– que el trabajador hubiere abandonado el puesto de trabajo, y que al contrario se acreditó que fue la empresa quien suspendió abruptamente la retribución al trabajador, sin tener en cuenta que se encontraba incapacitado.

Para condenar a las indemnizaciones moratorias por falta de pago de las prestaciones sociales y por no consignar las cesantías a un fondo argumentó que la mala fe quedó acreditada, sin que existiera ninguna justificación real por parte de la demandada para no pagar las prestaciones sociales y los salarios que se quedaron adeudando. Desechó los argumentos de la demandada, en sentido que se trataba de un contrato de prestación de servicios y que el propio demandante fue quien no quiso volver a aceptar los trabajos que se le ofrecían, precisando que resultaba procedente el pago de las mencionadas indemnizaciones.

VI. APELACIÓN PRESENTADA POR LAS PARTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Tanto la parte demandante como la empresa demandada CO DIESEL S.A.S. recurrieron en apelación la sentencia de primera instancia.

Apelación de la parte demandante.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el apoderado judicial del accionante, en los siguientes términos:

Su apelación estuvo enfocada al reconocimiento de una pretensión no invocada inicialmente en la demanda, consistente en la pensión de invalidez, aduciendo las facultades extra petita.

Lo sustentó manifestando que en el proceso se acreditó el estado de invalidez del señor William René Velásquez Correa, quien cuenta con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.

Precisó que, conforme a postura jurisprudencial del órgano judicial de cierre, la demanda no constituye una camisa de fuerza que impida reconocer otros derechos cuando se encuentran debidamente acreditados, y al efecto llamó la atención de este colegiado en sentido que Colpensiones, quien habría negado con anterioridad el reconocimiento pensional, hizo parte de esta Litis, lo cual permitiría que se la condene al reconocimiento de la prestación económica periódica por invalidez, considerando el debido agotamiento de la reclamación administrativa previo a la interposición de la demanda.

Agregó que este reconocimiento se hace imperioso, si se tiene en cuenta que al demandante Colpensiones le volverá a negar el reconocimiento de la pensión una vez se le vuelva a reclamar después de pagados los aportes pensionales por el empleador, argumentando que las semanas se pagaron con posterioridad a la ocurrencia del siniestro, dejando al actor desprovisto de este derecho.

Apelación de CO DIESEL SAS:

La empresa demandada CO DIESEL SAS expresó completo inconformismo con la sentencia de primera instancia, y lo sustentó manifestando que la misma desconoció la prueba obrante en el plenario, principalmente la prueba testimonial, el interrogatorio depuesto por el demandante y la documental, que daba cuenta de los pagos esporádicos por servicios ocasionales prestados.

En cuanto a la testimonial, adujo que los testigos Luis Carlos Rojas Ramírez e Ignacio Bautista, contradictorio el primero de ellos, y claro y contundente el segundo, al estar presente en todo el desarrollo de los hechos, dieron efectiva cuenta de que el actor disponía de su tiempo y horario para ingreso y salida del lugar de prestación del servicio, no portaba uniforme de la

empresa, los trabajos se realizaban de manera esporádica y se le pagaba por trabajo efectivamente realizado.

Con relación a los dichos del demandante en la diligencia de interrogatorio de parte, expresó que este debió haber sido declarado confeso, teniendo en cuenta sus respuestas evasivas frente a todo lo que se le preguntaba.

En lo referido a la prueba documental aportada por la empresa, afirmó que los dichos de los testigos fueron corroborados por las ordenes de servicio, los comprobantes de pago de honorarios, la invariabilidad y falta de continuidad en los pagos y las cuentas de cobro por la actividad efectivamente prestada con valores disímiles, que acreditaban que se trataba de pago a servicios efectivamente realizados y no la retribución en el marco de una relación subordinada. Preciso que a partir de esta prueba documental y del propio contrato de prestación de servicios, es pertinente concluir que lo que existía entre las partes era una relación contractual de carácter civil.

Adujo que el despacho se amparó en la presunción del artículo 24 del CST., pasando por alto que dicha presunción fue desvirtuada con las referidas pruebas.

Estima que el A quo confunde las modalidades de contrato por prestación de servicios y contrato laboral, argumentando que es obvio que con el demandante no existía un contrato de carácter gratuito, pero que ello no debe llevar a suponer la existencia de vínculo subordinado.

Expresó que la autonomía, independencia y trabajo por cuenta propia del actor se encuentra probada con el hecho de que laborara al servicio de otras personas naturales o jurídica, como el Señor Omar Velásquez y la empresa Coordinadora de Tanques, con quién también tenía suscrito un contrato de prestación de servicios, que ejecutaba simultáneamente al suscrito con CO DIESEL SAS.

Sustentó esta ausencia de exclusividad, expresando que, en el expediente obra prueba documental que da cuenta que el demandante presentó demanda laboral en contra de la empresa Coordinadora de Tanques, la cual cursa en el juzgado 18 laboral del circuito de Medellín bajo radicado 2016-1255, en la cual el demandante confiesa que prestaba sus servicios por el mismo tiempo que se aduce en este proceso.

Refutó que el A quo hubiere formado su convencimiento a partir de la certificación expedida por CO DIESEL SAS, argumentando que en la misma no se están certificando los pagos que se realizaban al contratista, ni la forma en que se desarrollaba la prestación del servicio, por lo que considera que se dio un alcance e interpretación errada a dicha certificación.

De manera particular, recurrió la declaratoria de terminación injusta del contrato y la indemnización que se ordenó pagar, argumentando que la empresa no dejó abruptamente de pagar los servicios al contratista, sino que tal y como se probó con la declaración del señor Ignacio Bautista, el demandante dejó motu proprio de aceptar los servicios que se le requerían y para los que era llamado, alejándose por determinación propia de prestar el servicio, y que, la empresa no tuvo conocimiento de las incapacidades médicas del actor ni de la calificación de su pérdida de capacidad laboral, ya que no existió ningún requerimiento por parte de las entidades de previsión social.

Se opuso a la condena a las indemnizaciones moratorias del artículo 65 del CST y del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, precisando que la empresa no incurrió en mala fe y que siempre actuó bajo el convencimiento de encontrarse bajo la ejecución de un contrato de prestación de servicios que no generaba la obligación de pagar prestaciones sociales al contratista; contrato que era aceptado por ambas partes; convicción que se acrecentaba con la falta de exclusividad por parte del contratista, quien prestaba su labor a otras personas.

Alegatos de conclusión

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, el apoderado judicial del demandante allegó escrito de alegaciones. A través del mismo, reiteró sus planteamientos esbozados en la sustentación de la apelación, en sentido que se ordene en favor del demandante el pago de la pensión de invalidez, teniendo en cuenta *i)* que se logró acreditar la efectiva prestación del servicio y todos los elementos esenciales que configuran la existencia de una verdadera relación de trabajo; *ii)* que, conforme a calificación de pérdida de capacidad laboral del 3 de marzo de 2017 realizada por Colpensiones, el demandante tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; *iii)* en la fijación del litigio se expuso esta situación, debiendo ser Colpensiones la obligada al pago de la prestación; *iv)* a dicha entidad se le reclamó el reconocimiento pensional, y ante la negativa se agotaron debidamente los correspondientes recursos, o *v)* en su defecto, debe imponerse dicha obligación al empleador.

Por su parte, el Dr. Roque Alexis Ortega Correa, con TP. Nro. 209.067 del CSJ presentó alegatos de conclusión como apoderado judicial sustituto de Colpensiones.

Esta Sala le reconoce personería jurídica amplia y suficiente al citado profesional del derecho para que en la calidad anotada lleve la representación judicial de Colpensiones.

A través de dichos alegatos expresó que Colpensiones carece de legitimación en la causa para reconocer al demandante lo solicitado; subrayó que es en cabeza del empleador que recaen las obligaciones de cotizar al sistema pensional por los trabajadores, y solicitó la exoneración de la entidad de toda responsabilidad.

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Contrato Realidad – Prestaciones sociales – Indemnización por despido – e indemnizaciones moratorias. – Pretensión extra petita.

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Partiendo de la tesis jurisprudencial y legal del contrato realidad en materia laboral, se resolverá en el presente caso, estableciendo si, como lo aduce el censor, en el presente caso se acreditó un contrato de carácter civil ajeno a toda subordinación que no generaría en favor del actor los derechos prestacionales e indemnizatorios de carácter laboral que le fueron reconocidos en primera instancia, o si, por el contrario, efectivamente existió un vínculo laboral.

Luego de desatar la alzada propuesta por la empresa CO DIESEL SAS, se ocupará la sala de resolver el inconformismo que sustenta la apelación de la activa, referido a que se ordene el pago de la pensión de invalidez en favor del señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA, pese a que tal petitum no hizo parte de la demanda inicial.

Finalmente, de confirmarse la decisión de instancia, evaluará este colegiado si con la decisión de primera instancia se genera alguna consecuencia adversa en contra de COLPENSIONES, que dicha entidad no esté llamada a soportar. Ello en virtud del grado jurisdiccional de Consulta en favor de dicha entidad.

De cara al problema jurídico planteado, cabe recordar que el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo determina los elementos que configuran el contrato de trabajo así:

- a) Actividad personal del trabajador, es decir, la realizada por sí mismo.
- b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono.
- c) Un salario. Como retribución del servicio.

En ese orden de ideas, es claro que para la existencia válida de una relación laboral contractual es necesario que concurren los tres elementos antes reseñados, sin importar la denominación que los contratantes impongan al mismo, circunstancia que tiene sustento constitucional en el artículo 53 superior que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas; de no serlo así indefectiblemente se estaría en presencia de otra clase de contrato, no sujeto por consiguiente a la ley laboral.

Por su parte, el artículo 24 del C.S.T. consagra una presunción legal, según la cual *“toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”*, y la consecuencia de su aplicación, no es otra que la inversión de la carga de la prueba, es decir, una vez demostrada por la parte actora la prestación personal de servicios en favor de parte la demandada, dentro de unos determinados extremos temporales, incumbe a esta última desvirtuar la existencia del vínculo presumido, a través de los medios probatorios legalmente establecidos, esto es, probar que dicha prestación de servicios no fue subordinada ni dependiente.

Ahora, pese a la presunción legal a la que se ha hecho referencia, para la declaratoria del contrato realidad, corresponde al trabajador, además de demostrar la prestación personal del servicio, acreditar los extremos temporales, el monto del salario, la jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario y el hecho el despido, cuando éstos 2 últimos se aducen, entre

otros aspectos, tal como ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (ver, entre otras, la sentencia del 4 de noviembre de 2015, SL 16110-2015).

Respecto a los reparos que la apoderada judicial de la empresa CO DIESEL SAS le hace a la sentencia de primera instancia por haber dado aplicación a la presunción que rige en favor del trabajador contenida en el artículo 24 del CST., conforme a la cual *“se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”*, cuando –a su juicio– existen pruebas testimoniales y documentales que acreditan que entre las partes existió un contrato ajeno a un vínculo subordinado, debe decirse que la inteligencia que el A quo dio a esta disposición de cara al caso concreto, entendiendo que frente a la inobjetable acreditación de la prestación personal del servicio, aceptada incluso por la demandada, correspondía a la demandada desvirtuar que ese vínculo subordinado, lo cual no ocurrió.

En efecto, ninguno de los testigos Luis Carlos Rojas Ramírez e Ignacio Bautista, respectivamente arrimados al debate por la activa y por la pasiva, negaron que existiere una prestación personal del servicio. Tampoco lo hicieron ni el demandante, ni el representante legal de la empresa demandada en sus respectivos interrogatorios de parte.

Ello resulta consonante con la regulación de las propias partes en el contrato, donde establecieron en las cláusulas 8,2 y 8,3 del contrato (fl. 26 vuelto), que denominaron de prestación de servicios, que el contratista se comprometía a *“prestar el servicio de manera personal y bajo su propia responsabilidad”* y a *“no transferir este contrato a otra persona, compañía, corporación o cualquiera otra entidad, sin el permiso escrito del CONTRATANTE”*.

Esa certeza de la existencia de la prestación personal del servicio, enfoca el debate probatorio a que la parte demandada pruebe que la actividad se realizaba de manera independiente y sin subordinación.

En el sub iudice, no advierte este colegiado que la demandada haya desvirtuado la la presunción del artículo 24 del CST, es decir, no probó que en realidad nos encontráramos frente a un contrato de prestación de servicios. No existe duda que todas las condiciones en que se desarrollaba el servicio denotan la existencia de un contrato laboral.

La prueba testimonial, contrario a desvirtuar la relación laboral invocada, permitió reafirmarla. En efecto, si bien, tal y como la misma apoderada judicial de la empresa demandada lo sostiene y el juez lo advirtió, al tratarse de un testigo que no aportó suficientes elementos en orden a la determinación de los extremos temporales ni las calendas en las cuales se prestó el servicio, la declaración testimonial del señor Luis Carlos Rojas Ramírez permitió conocer cuál era la dinámica funcional en que se desempeñaba el trabajador.

De los dichos de este testigo, destaca la sala elementos de convicción como que el jefe del demandante era el señor Luis Carlos Uribe, quien también tenía participación directiva y accionaria en las empresas TRANSPORTES INEXIDABLES SAS y COORDINADORA DE TANQUES SAS (ver certificados de existencia y representación legal de folios 18 y ss); que al señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA le daban instrucciones y órdenes para realizar sus actividades como mecánico; que las herramientas pertenecían a la empresa, tal y como incluso lo reguló el propio contrato; que el señor Luis Carlos Uribe era quien le pagaba semanalmente; que si bien no cumplía un horario estricto, si permanecía todo el día disponible en la empresa, donde realizaba sus trabajos, y eventualmente salía a desvarar un carro, pero de un cliente de la misma empresa CO DIESEL SAS; que tenía por jefe al señor Walter Pemberty; que necesitaba permiso para retirarse de las instalaciones de Co Diesel y debía pedirle permiso al jefe inmediato; que lo llegaron a regañar varias veces por llegar tarde. El jefe inmediato, Don Luis Carlos lo llegó a regañar por llegar tarde; que no podía enviar a otra persona para que realizara la labor de mantenimiento de vehículos, y que no reparaba vehículos a ninguna otra empresa.

Esta declaración incluso, si se relaciona con la del señor Ignacio Bautista, testigo presentado por la empresa CO DIESEL SAS, permite advertir puntos de encuentro, y llega a fungir como complementaria en aras de formar el convencimiento sobre la realidad de esta relación.

Corolario de ello, adviértase como el señor Ignacio Bautista, si bien manifestó que al demandante se le llamaba muchas veces para que hiciera determinado trabajo de mecánica; que iba cuando quisiera; que su asistencia era muy irregular; que le pagaban por trabajo que ejecutara, no dejó de reconocer que el señor VELASQUEZ CORREA no trabajaba para otra persona o empresa; que las empresas Co Diesel y Coordinadora de Tanques comparten la misma sede y que el demandante no realizaba mantenimiento a otros vehículos.

Con relación a la constancia en la realización de los trabajos, es la prueba documental obrante a folios 29 y siguientes del plenario, constituida por la certificación de las sumas pagadas al trabajador, la certificación de la empresa CO DIESEL y el soporte de los comprobantes de pago, la que permite advertir que se trataba de una función permanente y sostenida en el tiempo.

Incluso, llama la atención de la sala, que el testigo Ignacio Bautista, al tiempo que sostiene que el demandante prestaba servicios de manera muy esporádica a la empresa, sostenga que a este se le pagaba semanalmente.

Ahora, como dichos relevantes del testigo presentado por la empresa CO DIESEL SAS, señor Ignacio Bautista, también se encuentran sus manifestaciones en torno a que dicha empresa se dedica a ejecutar suministro de repuestos, pero también mantenimiento a los vehículos, de tal manera contrariando los dichos del representante legal, señor Juan Fernando Vásquez Escobar, quien fue enfático en afirmar que la empresa solo se dedicaba al suministro de los repuestos pero que no prestaba servicios de reparación o mantenimiento. En el certificado de existencia y representación legal de dicha empresa, a folio 59 vuelto del expediente, se puede advertir que, tal y como lo

dijo el mencionado testigo, el mantenimiento a vehículos sí se encuentra dentro del giro ordinario de los negocios de CO DIESEL SAS.

Incluso, adviértase como la declaración del testigo Ignacio Bautista, testigo presentado por la empresa CO DIESEL SAS, desmiente y deja sin piso las manifestaciones del representante legal de la compañía, quien en interrogatorio de parte afirmó que la empresa no tiene parqueaderos ni patios, sino un pequeño almacén y una pequeña bodega en su oficina, asegurando que los patios son de las empresas de transporte o de los propietarios que prestan servicios a los conductores.

El citado testigo fue claro en referir que en el Barrio Córdoba de esta ciudad funcionaba el lugar donde quedaban los patios en los que la empresa CO DIESEL SAS realizaba todas sus operaciones de suministro de repuestos y mantenimiento a los vehículos.

Este testigo también corroboró que el demandante no prestaba sus servicios de mecánico de manera independiente a otra empresa, y que el señor Walter Pemberty era auxiliar de patios, de quien el primero de los testigos, Luis Carlos Rojas Ramírez, dijo que le daba órdenes al señor demandante.

Incluso cuando al testigo Ignacio Bautista se le preguntó si al demandante se le dictaban capacitaciones, respondió que los proveedores de repuestos citaban a capacitar a los mecánicos de la empresa, dentro de los cuales indudablemente se encontraba el señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA, de quien también dijo, coincidiendo con el primero de los testigos, que el demandante no enviaba otra persona para que realizara el mantenimiento de los vehículos, y corroboró lo ya estipulado en el contrato, que las herramientas eran propiedad de la empresa CO DIESEL SAS y se encontraban a disposición de los mecánicos para cubrir sus necesidades laborales.

Ahora, especial atención merece el aspecto de la ausencia de exclusividad del señor WILLIAM RENÉ VELÁSQUEZ CORREA en la realización

de su labor, y que se erige en un argumentó de la apoderada judicial de la empresa demandada para refutar la declaratoria de existencia de relación laboral, insistiendo en que el actor prestaba sus servicios a varias personas naturales y jurídicas y, además tiene una demanda que cursa en el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín en contra de la empresa Coordinadora de Tanques, donde solicita la declaración de relación laboral por calendas similares a las de este proceso.

Al respecto es preciso reseñar que el tema de la concurrencia de contratos no se encuentra proscrito por nuestra legislación, en tanto el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo establece que *“un mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más patronos, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios a favor de uno solo”*.

No obstante, en el presente juicio quedó probado, a partir de los dichos de los testigos, coincidentes en el tema, con la declaración del propio representante legal de la empresa y, con los certificados de existencia y representación legal de las empresas TRANSPORTES INOXIDABLES SAS, COORDINADORA DE TANQUES SAS y CO DIESEL SAS, visibles a folios 18 y siguientes del expediente, que estas empresas, si bien no tienen una relación mercantil expresa de control sobre ellas mismas, sí fungen en el giro de un grupo societario que se encuentra conformado por las mismas personas y en el que se encuentra a la cabeza el señor Luis Carlos Uribe Moreno.

Bajo esta dinámica cobra certidumbre los propios dichos del demandante en su interrogatorio de parte que coinciden con las manifestaciones de los testigos, cuando afirmaba que en una época le decían que las cuentas de cobro las presentara a nombre de una u otra de estas empresas.

Lo cierto, para el interregno comprendido entre el 1º de agosto de 2014 y el 22 de junio de 2016, es que el señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA se encontraba desarrollando su labor al servicio de CO DIESEL SAS, y que si bien en el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Medellín el demandante presentó demanda laboral contra la empresa TRANSPORTES INOXIDABLES LTDA, ello

responde a la reivindicación de los derechos laborales que, sin que se conozca por parte de este colegiado si los tiene o no respecto de esa empresa, él busca reivindicar, ya que afirma que desde hace más de 25 años labora al servicio de las mencionadas compañías.

Adviértase como a folios 12 y siguientes del expediente, el actor acredita la existencia de varios contratos de prestación de servicios, unas veces fungiendo como contratante TRANSPORTES INEXIDABLES o COORDINADORA DE TANQUES, o CO DIESEL SAS, y siempre suscribiendo dichos contratos el regente de los negocios e integrante de las juntas directivas de las empresas, señor Luis Carlos Uribe Moreno.

A partir de las anteriores consideraciones, encuentra esta sala que no le asiste razón a la apoderada judicial de la empresa CO DIESEL SAS cuando manifiesta en su recurso que el A quo confundió las figuras contractuales del contrato de prestación de servicios de carácter civil y el contrato laboral de carácter subordinado. Tal confusión no existió, ni se gestó por identificar la retribución económica, denominada bajo el rótulo de anticipos, honorarios o precio del contrato que se cruzaba con órdenes de servicio o cuentas de cobro, en el que se hacía aparecer como un contrato de carácter civil, pero que en realidad correspondía a un salario periódico que percibía el trabajador por estar desarrollando el contrato realidad subordinado.

Ahora, dentro de los argumentos de la recurrente, plantea que las respuestas evasivas del señor demandante en su interrogatorio de parte, sería pertinente declararlo confeso, debiendo aplicarle las consecuencias procesales que tal declaración implica para la desventura de sus pretensiones en este proceso.

Al respecto debe decirse que, si bien el artículo 205 del Código General del proceso establece que la renuencia a responder y las respuestas evasivas del demandante en este caso, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión que contengan la demanda y las excepciones de mérito, al no tratarse de interrogatorio escrito, no puede desconocerse que

dicha sanción no aplica de pleno derecho, sino que debe ser valorada y aplicada en la oportunidad procesal pertinente, que no es otra que el momento en que se está desarrollando la audiencia, por parte del juez director del proceso.

No puede –luego de haberse pretermitido la oportunidad de que el operador jurídico que adelantaba la diligencia no lo haya advertido, ni la parte interesada lo haya solicitado- pretenderse que el juez colegiado de apelaciones entre a valorar dicha situación, a efectos de advertir, si bajo la aplicación de tal sanción se logran revertir los efectos de una sentencia que se fundamentó, más que en presunciones legales, en pruebas que llevaron a formar el convencimiento en orden a declarar la existencia de un contrato realidad de trabajo, bajo la indiscutible concurrencia de los elementos esenciales que contempla la ley laboral sustancial para esa clase de contrato.

Hasta aquí, luego de encontrar procedente **confirmar** los numerales 1º y 2º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en cuanto declararon la existencia de contrato de trabajo entre las partes y se condenó a las prestaciones sociales, salarios insolutos y vacaciones adeudadas, antes de abordar la apelación propuesta por la parte demandante, solo resta desatar los puntos planteados por la apoderada judicial de CO DIESEL SAS, consistentes en determinar si hay o no lugar a condenar a dicha empresa al pago de la indemnización por despido injusto, a partir de revisar si el vínculo feneció o no de manera injustificada, y; revisar la condena a las indemnizaciones moratorias.

En lo referido al despido injusto, el juez de primera instancia dio por probado que la empresa CO DIESEL SAS había de manera abrupta interrumpido los pagos al señor WILLIAM RENÉ VELÁSQUEZ CORREA, y que tal situación habría configurado un despido injusto, el cual de todas maneras no lo tuvo como realizado en virtud del estado médico del trabajador, quien había un día antes de la ruptura cesado en sus incapacidades y para ese momento aún no se encontraba calificado por el fondo de pensiones.

Los argumentos del A quo para concluir en un despido injusto apuntan indirectamente a sugerir que la terminación del contrato, habría ocurrido por causas atribuibles a la propia empresa, relacionadas con sus incumplimientos patronales.

No obstante, en el plenario no se probó que el señor WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA hubiere hecho uso de la facultad de terminar el contrato haciendo uso del autodespido o despido indirecto.

De esta manera, no se acredita la exigencia establecida en el parágrafo del artículo 62 del CST., en cuanto se determina que *“la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación”*, a fin de que *“posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”*.

Lo que sí se encuentra probado, con la declaración del testigo Ignacio Bautista, es que el contrato finalizó porque el señor William René Velásquez Correa no volvió a realizar los trabajos y se alejó de la prestación de estos servicios; claro, en parte muy seguramente de su estado de salud, pero quedó probado que motu proprio, después de haber cesado sus incapacidades no volvió a trabajar.

Conforme a lo anterior, le asiste razón a la apoderada judicial de CO DIESEL S.A., cuando argumenta en el recurso de alzada que el despido no quedó probado, y que por ende no es procedente la indemnización por despido que en suma de \$2.123.269 se le impuso pagar a la empresa.

En consecuencia, se **revocará** el numeral 3º de la parte resolutive de primera instancia, por haber declarado la terminación injusta del contrato y haber condenado a la indemnización por despido injusto.

Con relación a las indemnizaciones moratorias de los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990, por haber omitido pagar salarios y prestaciones y no consignar las cesantías a un fondo administrador, argumenta la recurrente

que la empresa CO DIESEL SAS actuó de buena fe y que siempre estuvo bajo la creencia de encontrarse bajo un contrato de carácter civil que no generaba estas obligaciones patronales.

Sin embargo, y pese a que estas indemnizaciones no operan de manera inmediata e inexorable (entre otras, sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia SL2833 de 2017 y SL194 de 2019), y que es necesario acreditar la mala fe¹, e incluso, siendo un criterio existente en la jurisprudencia, el exonerar en ciertos casos a quien obró bajo la creencia de no deber prestaciones sociales y consignación de cesantías por encontrarse bajo una modalidad ajena a la laboral, ello no constituye una razón suficiente en todos los casos, en atención a que la práctica empresarial y laboral ha denotado la existencia de maniobras contractuales, con el único fin de evadir responsabilidades patronales.

Al respecto, el órgano de cierre, en la sentencia con Radicación 71.154 de 2019, dejó sentado: *“no es suficiente aducir que se actuó bajo el convencimiento de hallarse en el marco de un contrato de prestación de servicios porque así se estipuló, sino que deben corroborarse las condiciones que llevaron a estructurar esa creencia razonable...”*.

En el sub judice, existen razones fácticas suficientes para concluir que la empresa no actuó de buena fe y que estuvo asistida del interés de ocultar la realidad subordinada que imperaba en sus relaciones con el trabajador. En efecto, por muchos años sostuvo la implementación de contratos de prestación de servicios, mutando la persona del contratante a efectos de que en ocasiones fungiera como tal TRANSPORTES INEXODABLES LTDA, en otras COORDINADORA DE TANQUES, y CO DIESEL LTDA. Además, pese a las condiciones claras de prestación directa del servicio, clara subordinación y

¹ La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha tenido por criterio que *“la sanción moratoria solo puede descartarse mediante un examen acucioso del material probatorio y la demostración de la buena fe patronal. Por tanto, si de las circunstancias fácticas se colige que el empleador obró con lealtad, sin ánimo de ocultación o de atropello, debe ser absuelto por dicho concepto, pues la existencia de una verdadera relación laboral no trae consigo la imposición de la sanción, ya que, como se subrayó, su naturaleza sancionatoria impone al juzgador auscultar en el elemento subjetivo a fin de determinar si el empleador tuvo razones atendibles para obrar como lo hizo...”*. (SL194 de 2019).

mantenimiento disponible del trabajador para los servicios de mantenimiento y mecánica de los vehículos optó por decidirse a mantener formas contractuales que no le generaran responsabilidad patronal, incluso existiendo de por medio situaciones que comprometían la salud del trabajador; cesó en pagos salariales y ocultó la verdadera naturaleza del vínculo contractual de manera ilegal e injustificada.

A partir de estas consideraciones, estima la sala **confirmar** los numerales 6 y 7 de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, al advertir que se encuentra ajustada a la ley la condena a las indemnizaciones moratorias en los términos ordenados por el A quo.

Apelación del demandante:

La activa apela la decisión por no haber ordenado el pago de la pensión de invalidez del demandante, cuando se encuentran reunidos los criterios para su reconocimiento.

Al respecto, se evidencia que nos encontramos frente a un aspecto que no puede siquiera tenerse como punto desfavorable de la sentencia recurrida, ya que no hizo parte de la Litis; se fundamenta en una prueba sobreviniente de una calificación de invalidez frente a la cual no ha tenido Colpensiones la posibilidad siquiera de pronunciarse, y resultan completamente injustificadas las argumentaciones del recurrente en orden a que este aspecto se incluya dentro de las facultades del operador jurídico en materia laboral.

El litigio que concluyó con la sentencia que se revisa nunca estuvo enfocado a definir este aspecto de la seguridad social, ya que incluso todo el debate incluyó como una de sus pretensiones principales el reintegro del actor, de tal manera conduciéndose toda la línea fáctica argumentativa y sustento legal, por la vía de la recuperación del empleo y el pago de las prestaciones sociales.

Las facultades extra petita del juez del trabajo y de la seguridad social, no pueden fungir como medio para desconocer el principio de congruencia procesal ni para vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso y a la correcta actuación jurisdiccional.

No existe ningún soporte jurídico que permita a la judicatura pasar a reconocer la pensión de invalidez al actor, y por ende se despachará desfavorablemente la alzada propuesta por el apoderado judicial del demandante.

Finalmente, en virtud del grado jurisdiccional de consulta, es preciso reseñar que con la orden contenida en el numeral 4º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, consistente en haber condenado a la empresa CO DIESEL SAS a pagar a COLPENSIONES los aportes faltantes para el riesgo de IVM, por el periodo comprendido entre el 1º de agosto de 2014 y el 22 de junio de 2016, o el reajuste de dichos ciclos, no se le está imponiendo a la entidad de seguridad social ninguna carga injustificada que vaya en contra de sus recursos. Al contrario, la decisión del juez de primera instancia, además de ser consecuente con la debida destinación de los recursos de la seguridad social (artículo 9º Ley 100 de 1993) y con las obligaciones radicadas en cabeza del empleador, motivadas a partir de la existencia de una relación laboral (artículos 15 y 17 ley 100 de 1993), ordenó que el respectivo calculo actuarial que se deba pagar comprenda los respectivos intereses moratorios, a fin de mantener el poder adquisitivo y la actualización de los recursos de la seguridad social que debieron pagarse en su oportunidad a Colpensiones.

Así las cosas, en todo lo demás, se **confirmará** la sentencia objeto de alzada.

Costas procesales:

En esta instancia, se han causado costas procesales a cargo de la parte demandante y en favor de la empresa demandada, por haber resultado vencida la activa en el recurso y haber prosperado parcialmente el recurso de apelación a la empresa demandada. Agencias en derecho: 1 SMLMV para 2021.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 3º de la parte resolutive de la sentencia objeto de apelación y consulta, de fecha y procedencia conocidas, en cuanto declaró terminación del contrato sin justa causa y condenó a la empresa **CO DIESEL SAS** a pagar al señor **WILLIAM RENÉ VELASQUEZ CORREA** la indemnización por despido injusto por valor de \$2.123.269, para en su lugar **ABSOLVER** a dicha empresa de dicho pago, por lo señalado en la parte motiva.


SEGUNDO: CONFIRMAR esa misma sentencia en todo lo demás, de conformidad a lo expuesto.

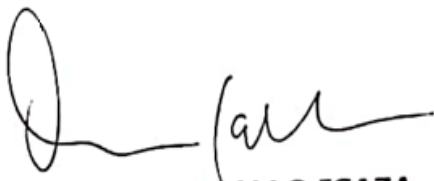
TERCERO: CONDENAR al demandante a pagar costas procesales de segunda instancia a la empresa CO DIESEL SAS. Agencias en derecho 1 SMLMV para 2021, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.


CUARTO: En su debida oportunidad devuélvase el expediente al juzgado de origen.

QUINTO: Se ordena la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.

Los Magistrados:


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
estados N ° **054** del **5 de abril de 2021.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>